



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA.

EXPEDIENTE: TEEP-JDC-209/2021.

ACTORA: FRINE SORAYA CORDOVA
MORAN.

TERCERO INTERESADO: JOSÉ
ANTONIO LÓPEZ RUIZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE
PUEBLA.

(CÓMPUTO SUPLETORIO DEL
DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL
20 CON CABECERA EN PUEBLA).

MAGISTRADA PONENTE: NORMA
ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ.

SECRETARIA INSTRUCTORA:
MARIANA PÉREZ ROJAS.

Heroica Puebla de Zaragoza, a treinta de agosto de dos mil
veintiuno.

VISTOS, los autos del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales de la Ciudadanía al rubro indicado, interpuesto por
Frine Soraya Córdova Moran, en su calidad de candidata la Coalición
Va por Puebla, a la Diputación del Distrito Electoral Uninominal 20 con
Cabecera en Puebla, en contra de *“la calificación y declaración de
validez de la elección, así como de la entrega de la constancia de
mayoría a JOSÉ ANTONIO LOPEZ RUIZ.”* (sic)

RESULTANDO¹:

I. **Glosario².** Para efectos del presente fallo se entenderá
por:

¹ Los hechos narrados corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa al respecto.

² Catálogo de expresiones o palabras abreviadas que se utilizan en la presente sentencia.

Actor, parte actora, inconforme, promovente:	Frine Soraya Córdova Moran.
Autoridad responsable:	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla
Constitución Federal, Carta Magna, Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local, Constitución del Estado:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Código Local, Código de la materia, CIPEEP, Código Electoral Local, Código Comicial:	Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
IEE, Instituto:	Instituto Electoral del Estado de Puebla.
PAN:	Partido Acción Nacional.
PRI:	Partido Revolucionario Institucional.
PRD:	Partido de la Revolución Democrática.
MORENA:	Movimiento de Regeneración Nacional
PT:	Partido del Trabajo
Juicio de la ciudadanía, JDC local:	Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

II. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos de los expedientes en estudio, se desprenden los siguientes:

1. Inicio del proceso electoral. El tres de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del IEE, declaró el inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente, dos mil veinte, dos mil veintiuno.



2. Jornada electoral. El día seis de junio, se llevó a cabo la jornada electoral, correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente, dos mil veinte, dos mil veintiuno.

3. Solicitud de Cómputo Supletorio. El día nueve de junio siguiente, el Consejero Presidente del Consejo Distrital del Distrito Electoral Uninominal Local 20, con cabecera en Puebla, Puebla, solicitó al Consejo General del IEE la realización del cómputo supletorio.

4. Aprobación de la realización del Cómputo Supletorio. En sesión permanente de nueve de junio del Consejo General del IEE, el diez siguiente, se aprobó el Acuerdo General identificado con la clave CG/AC-085/2021, en el que se determinó la remisión de los paquetes electorales y demás documentación electoral para el desarrollo del Cómputo Supletorio.

5. Cómputo supletorio. En la sesión permanente, así como en la fecha mencionada en el punto anterior, se realizó por parte de la autoridad responsable, el Cómputo Supletorio, declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la fórmula de Diputado de ese Distrito Electoral.

6. Sesión del Consejo General del INE. Con fecha veintidós de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, concluida la madrugada del día siguiente, aprobó el Dictamen Consolidado, relativo a la fiscalización realizada por su Unidad Técnica de Fiscalización, respecto a las candidaturas del Proceso Electoral Ordinario, dos mil veinte, dos mil veintiuno.

7. Interposición del JDC local. Inconforme con la determinación señalada en el punto 5 de este apartado, así como con el resultado del Dictamen Consolidado referido en el punto 6, el veintiséis de julio, la parte actora presentó escrito de demanda ante la autoridad responsable quien la tuvo por recibida en esa fecha, lo que se corrobora con la cédula de interposición de recurso³, documental

³ Constancia visible en la foja 114, del expediente, respectivamente.

pública con pleno valor probatorio, ello de conformidad con los artículos 358 fracción primera, inciso a), y 359 primer párrafo del CIPEEP.

8. Trámite ante el TEEP. El treinta de julio siguiente, fue recibido el oficio IEE/PRE-3120/2021, mediante el cual el consejero presidente del IEE, remitió el expediente señalado en el punto 7.

9. Reencauzamiento y Turno. Mediante acuerdo de dos de agosto, el Pleno de este Tribunal determinó reencauzar el medio como JDC local; en esa misma data, la Magistrada Presidenta, ordenó registrar el juicio de la ciudadanía en el libro de gobierno con la clave al rubro indicado, y turnarlo a la Ponencia a su cargo.

10. Radicación y reserva de admisión. El cuatro de agosto, la ponente radicó el presente asunto, y reservó la admisión del JDC local.

11. Cierre de instrucción. En su oportunidad la Magistrada Ponente determinó cerrar instrucción por considerar debidamente sustanciado el expediente al rubro indicado, convocando al Pleno de este Tribunal a la celebración de la sesión pública de resolución.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 373 y 374 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se determinó sesionar en esta fecha para resolver el presente medio de impugnación.

RAZONES Y FUNDAMENTOS:

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente asunto, ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Federal; 3 fracción IV de la Constitución Local; 1 fracciones V y VII, 3, 8, 325, 338 fracción III, 340 fracción II, 353 Bis y 354 párrafo segundo del CIPEEP;



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

TEEP-JDC-209/2021

11, fracción IV, 14, fracciones VII y XIX, y 18 fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En el caso concreto, este Tribunal Electoral es competente para conocer del presente asunto, al ser promovido por una ciudadana en su carácter de candidata a Diputada por el Distrito Electoral Uninominal 20 con Cabecera en la Ciudad de Puebla, Puebla, para controvertir el Acuerdo del Consejo General del IEE identificado con la clave CG/AC-090/2021, en el que se efectuó el cómputo supletorio final de la elección de la Diputación del Distrito Electoral antes mencionado, declaró la validez de la elección y su vez la elegibilidad del candidato de la coalición integrada por los partidos políticos Morena y Partido del Trabajo, así como la emisión del dictamen consolidado; supuesto que se encuentra contenido en el artículo 353 Bis, del CIPEEP, el cual prevé la existencia del Juicio para Protección de los Derechos-Político Electorales de la Ciudadanía.

SEGUNDO. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada resulta atinente analizar si en la especie se actualizan o no, alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el contenido del artículo 369 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, toda vez que el análisis de las mismas resulta preferente y de orden público; lo anterior además, en atención a lo sustentado por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral en la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- Previamente al estudio de la controversia planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público de acuerdo al artículo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SC-I-RI-019/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-0219/91. Partido Acción Nacional. 22-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-0209/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.
SC1ELJ05/91”

Al efecto, resulta atinente señalar el contenido de los artículos 353 bis, 368, 369 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que son del tenor siguiente:

Artículo 353 Bis. *El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía; es el medio de impugnación a través del cual se combaten violaciones a los derechos de votar y ser votada o votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, mismo que podrá ser ejercitado por el ciudadano por sí mismo y en forma individual, o por medio de sus representantes legales cuando:*

I.- *Existan violaciones a los derechos político-electorales de ser votada o votado cuando, sea negado indebidamente el registro como candidata o candidato a un cargo de elección popular local habiendo sido propuesto por un partido político;*

II.- *Habiéndose asociado con otras ciudadanas o ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos del Estado, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político local o agrupación política local. La demanda deberá presentarse por medio de quien ostente la representación legítima;*

III.- *Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.*

IV.- *Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales.*

De igual forma, en tratándose de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades partidistas durante los procesos internos de elección de dirigentes y selección de candidatas o candidatos a puestos de elección popular.

V.- *En contra de sanciones impuestas por algún órgano del instituto o de un partido político, siempre y cuando implique violación a un derecho político-electoral;*

VI.- *Se vulnere el derecho a la información o el derecho de petición en materia político-electoral; y*

VII.- *En contra de los actos y resoluciones que violenten el derecho para integrar las autoridades electorales del Estado.*

El Tribunal tiene que garantizar la tutela jurisdiccional de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos que participen en los procesos electorales que se celebren en el Estado.

El plazo para la interposición del juicio será de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en se tenga conocimiento del acto que se recurre.

(...)"

"ARTÍCULO 368.- *El Secretario del Consejo General o el Secretario General de Acuerdos, en su caso, resolverán de inmediato sobre la admisión del recurso.*

El Consejo General y el Tribunal podrán desechar de plano, aquellos recursos en que se actualice alguna de las causales para considerarlos notoriamente improcedentes.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

Sólo para la admisión o desechamiento de los recursos, podrá aplicarse de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.”

“ARTÍCULO 369.- En todo caso serán **notoriamente improcedentes** los recursos, y por tanto deberán desecharse de plano, cuando:

I.- Su interposición sea ante autoridad diversa de la responsable;

II.- El promovente no acredite su personalidad o interés jurídico;

III.- Su presentación sea fuera de los plazos que señala este Código;

IV.- El representante del partido político ó coalición que promueva, omita firmar autógrafamente el escrito del recurso;

V.- Las pruebas no se ofrezcan ni se acompañen al escrito del recurso;

VI.- Se omita manifestar los agravios que le causa el acto combatido;

VII.- En un mismo recurso se comba tan diferentes elecciones; y

VIII.- No se cumpla con alguno de los requisitos que este Código exige”.

De lo antes citado, claramente se advierte que los ciudadanos podrán presentar juicio para la protección de los derechos político electorales, por escrito ante la autoridad responsable, dentro del **plazo de tres días**, la que deberá dar el trámite respectivo al medio de impugnación.

Para impugnar un acto que se considera violatorio de derechos es presupuesto *sine qua non* la subsistencia del derecho general de impugnación del acto combatido, lo cual no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposición del recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada en la legislación ordinaria.

En cada eslabón de toda cadena impugnativa rige el principio de preclusión, conforme al cual el derecho a impugnar sólo se puede ejercer, por una sola vez, dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el plazo sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no fue agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso impugnativo.

Como ya se señaló el artículo 353 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es el medio de impugnación a través del cual se combaten violaciones a los derechos de votar y ser votada o votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y que el término para interponerlo es de **tres días**.

En esencia, para lograr en todo caso la procedencia del presente juicio de la ciudadanía, debió haber sido interpuesto dentro de los plazos que expresamente señala el artículo de referencia, ya que de no hacerlo así se entiende que los actos han sido consentidos expresamente, operando al efecto el principio de preclusión al que se ha hecho alusión y el de definitividad que se encuentra contenido en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 194 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Ahora bien, para mayor claridad en este asunto, resulta relevante conocer cuales son los actos reclamados por el incoante en su demanda, los que básicamente consisten en:

- a) La calificación y declaración de validez de la elección (que llevó a cabo el Consejo General del IEE en sesión permanente de nueve de junio);
- b) La entrega de la constancia de mayoría (que llevó a cabo el Consejo General del IEE en sesión permanente de nueve de junio);
- c) La emisión del dictamen consolidado, donde se estableció que hubo un rebase de tope de gastos de campaña por la cantidad de \$94,739.48 (aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año).



En el caso, se precisa que en sesión permanente de nueve de junio de dos mil veintiuno, se aprobó por unanimidad el acuerdo del Consejo General del IEE por el que se efectuó el computo supletorio del Distrito Electoral Uninominal 20, con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza, relativo a la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, declara la validez de la elección y la elegibilidad de la fórmula, con clave de identificación CG/AC-090/2021, de la que se advierte que la misma **concluyó el diez de junio de dos mil veintiuno** y por lo cual, desde ese momento comenzó a transcurrir el término de **tres días** a que se refiere el contenido del artículo 353 bis del Código Comicial Local, para impugnar los citados actos, sin que se pueda observar una excepción para presentar en plazo distinto el medio impugnativo, transcurriendo este del **once al trece de junio de dos mil veintiuno**.

Por su parte existe en el expediente el sello de recepción de recurso, de la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado, de veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

Del análisis que éste Órgano Colegiado realizó al recurso interpuesto advierte que tal y como se desprende del acuse de recibo el medio de impugnación se presentó a las trece horas con veintinueve minutos del **veintiséis de julio de dos mil veintiuno**.

De lo anterior se evidencia que el medio de impugnación se presentó **más de un mes después de concluido el plazo legalmente establecido para hacerlo, por lo que es evidente que el mismo deviene extemporáneo**.

En ese sentido, conviene hacer una pausa, para establecer que además de que el presente recurso es extemporáneo, también se actualiza la figura de la **preclusión**, por haberse dejado de combatir los actos reclamados en el momento procesal oportuno.

Al respecto, se advierte que la preclusión del derecho de acción resulta, por regla general, de tres distintos supuestos:

- a) Por no haberse observado el orden u oportunidad previsto por la ley para la realización de un acto;
- b) Por haberse realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de otra, y,
- c) Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha).

Dicho criterio, se encuentra sustentado en la Jurisprudencia y Tesis, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral local, cuyos rubros son: **"PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUME LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO"**⁴, y **"PRECLUSIÓN. EXTINGUE LA FACULTAD PROCESAL PARA IMPUGNAR."**⁵, respectivamente.

Así, la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, en virtud del principio de la preclusión, una vez extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente.

Debe decirse que, la figura de la preclusión, prevalece en el sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues cada juicio en la materia se tramita y sustancia a través de un proceso integrado por una serie de actos y etapas sucesivos y concatenados, que una vez agotados se clausuran definitivamente, de tal modo que suscita el inicio o realización del acto subsecuente en forma inmediata, impidiendo con ello el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados absolutamente, sin dejar al arbitrio de las partes la elección del momento para realizar los actos procesales que consideren, obteniendo con ello, además de la certidumbre y

⁴ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala Jurisprudencia. Novena Época. XV, Abril de 2002. p. 314.

⁵ Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012. Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, 2012, pp. 30-31.



seguridad jurídica, la igualdad entre las partes en la prosecución del debido proceso jurisdiccional electoral.

De ahí que, extinguida o consumada la facultad para que las partes realicen un acto procesal, éste ya no podrá efectuarse de nueva cuenta, ya que al constituirse el proceso en etapas sucesivas no resulta posible otorgar a las partes la oportunidad de retornar a fases ya consumadas, en aras de que el órgano jurisdiccional pueda emitir sentencia definitiva, pues de lo contrario ésta se podría prolongar indefinidamente.

En esos términos, el artículo 353 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es el medio de impugnación a través del cual se combaten violaciones a los derechos de votar y ser votada o votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y que el término para interponerlo es de **tres días**; lo que hace evidente que la promoción del citado medio de impugnación ocasiona la clausura definitiva de la etapa procesal de la presentación de la demanda; es decir, se agota el derecho público subjetivo de acción, y se abre inmediatamente la siguiente etapa, consistente en la de remisión de la demanda y constancias de mérito al órgano jurisdiccional.

En el caso, es evidente que el actor dejó de ejercer el derecho que tenía para promover el juicio de la ciudadanía en contra de los actos consistentes en la calificación y declaración de validez de la elección; la entrega de la constancia de mayoría, ambos llevados a cabo por el Consejo General del IEE en sesión permanente de nueve de junio, y la emisión del dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año; actos que por estar concatenados entre sí, una vez agotados se clausuran definitivamente; lo que ocurrió en la especie, ya que el incoante no presentó el juicio de la ciudadanía dentro del

término de tres días que establece la ley, lo que se traduce en que su derecho de acción **precluyó**, impidiendo con ello el regreso a aquel momento procesal (el de declaración de validez de elección y entrega de constancia de mayoría), el que ya quedo extinguido y consumado absolutamente.

No sobra decir, que el principio de preclusión procesal no constituye una restricción al derecho del recurso efectivo y al acceso a la jurisdicción, contrario a lo que refiere el incoante en sus agravios, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que:

*"para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, **los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos**, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado"*⁶

Efectivamente, el principio de preclusión (al haberse agotado el derecho de impugnación del actor) tiene sustento en la certeza que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible, motivo por el cual **dicha institución no**

⁶ Entre otros, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 126.



contraviene el derecho de recurso efectivo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese orden, por regla general, se considera que el recurso efectivo se garantiza en el momento en que el actor contó con un medio a través del cual pudo controvertir los resultados de la elección en el Distrito Electoral Uninominal 20 con Cabecera en Puebla.

Tampoco pasa inadvertido para este Tribunal, que el actor en su recurso haya realizado diversas manifestaciones por las que refiere que es a partir de la emisión y aprobación del dictamen consolidado y a través del Acuerdo del Consejo General del INE, que surge, se materializa y actualiza de forma concreta y objetiva la causal para invalidar la elección, y que por tanto, a través de esos actos se activa y actualiza el término de tres días para la promoción del medio impugnativo, esto es, que el plazo debe comenzar a correr a partir de la aprobación del citado dictamen; que ello debe interpretarse en función a su derecho de acceso efectivo a la justicia, tutelado en el artículo 17 constitucional, así como en la garantía a un recurso efectivo, que prevén los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sin embargo, contrario a lo aducido por el incoante, -como se mencionó con anterioridad- los requisitos de procedencia de los recursos, como es el caso del término de tres días para presentar el juicio de la ciudadanía, previsto de manera clara en el artículo 353 bis del código electoral local, no puede desconocerse so pretexto de garantizar derechos humanos; ya que si bien es cierto existen diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que garantizan el derecho a un recurso efectivo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, **sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes** para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; pues de lo contrario,

equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función.

En efecto, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica; de igual forma, no debe entenderse en el sentido de que los recursos pueden ejercerse “en cualquier tiempo”, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, **por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones** y lograr que éstas puedan ser acatadas.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ***“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.”***⁷

También resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 98/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de

⁷ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, Décima Época.



rubro: ***“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.”***⁸

A todo lo anterior, se agrega que respecto de los actos reclamados por el incoante en su demanda se actualiza también el **principio de definitividad** en materia electoral.

En efecto, la Sala Superior, ha sostenido que el principio de definitividad, significa que los actos que emitan y ejecuten las autoridades electorales durante el desarrollo de cada una de las etapas de los procesos comiciales adquieren, a la conclusión de cada una de esas fases, las características de invariables y, por tanto, ya no son susceptibles de cambio, lo cual tiene como finalidad esencial otorgar **certeza** al desarrollo de las elecciones, así como seguridad jurídica a sus participantes.

En efecto, una vez clausurada cada etapa del proceso electoral, todo lo realizado, así como los actos de autoridad que dentro de dicha etapa se hayan llevado a cabo, por regla general no podrán ser modificados o sometidos a examen posteriormente.

Al concluir la etapa electoral respectiva, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma surten efectos plenos y se tornan en definitivos y firmes.

De acuerdo al principio de definitividad, las distintas etapas de los procesos electorales se agotan y clausuran sucesivamente, impidiendo que puedan abrirse nuevamente, de modo tal, que todo lo actuado en ellas queda firme.

Bajo ese contexto, el sistema de medios de impugnación, en específico el local, tiene como finalidad restituir a quienes promueven en el uso y goce del derecho político electoral que consideran les ha

⁸ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, Décima Época.

sido vulnerado, esto es, que exista la posibilidad real de determinar y decidir en forma definitiva la situación jurídica que debe prevalecer ante la situación planteada y, en su caso, la restitución o reparación del o los derechos vulnerados.

Sobre este punto, cabe decir que no todos los actos son susceptibles de ser reparados, ya que muchos de ellos se tornan irreparables, y en ese sentido, la irreparabilidad tiene como propósito garantizar la definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales con lo que se busca la certeza y seguridad en el desarrollo de los comicios.

Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 99 de la Constitución General, del que se desprende que el principio de **irreparabilidad** es consustancial con el de **definitividad**.

Como cuestión de procedibilidad, los actos electorales únicamente puede ser objeto de análisis judicial a través de los medios de impugnación cuando la reparación sea susceptible material y jurídicamente.

Lo anterior, también encuentra explicación en función del principio de **certeza**, que se extiende tanto a los participantes en la contienda como a la ciudadanía, en el conocimiento exacto de las personas que deben ocupar los cargos de elección popular con la certidumbre de que se agotaron los medios de impugnación que pueden modificar la elección.

En tal sentido, la inobservancia del principio de definitividad, como principio constitucional e institucional, incide en los principios de certeza, legalidad y gobernabilidad.

En efecto, no puede dejar de considerarse la relevancia y el significado que tiene el principio de definitividad para la **estabilidad democrática**, ya que uno de los valores que protege el principio de definitividad, -por ejemplo-, en el caso de que las candidatas o



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

TEEP-JDC-209/2021

candidato electos ya tomaron posesión de su cargo, es el de la **governabilidad**, es decir, la capacidad de una autoridad para tomar e implementar decisiones.

En el ejemplo citado, una precondition para la gobernabilidad es la estabilidad democrática, por esta razón, abrir una elección a la revisión judicial, cuando ya haya tomado posesión una candidata o candidato electo, puede poner seriamente en riesgo los valores señalados y tener consecuencias negativas para el buen gobierno democrático.

En este sentido, se destaca que en un gobierno democrático se busca evitar factores que lleven a una crisis de gobernabilidad o legitimidad, sobre todo cuando existió la posibilidad de implementar mecanismos de la solución de un conflicto.

Por ello, someter un proceso electoral a revisión judicial después de la toma de posesión del funcionario electo, puede significar reavivar un conflicto que ya había sido procesado por los cauces institucionales democráticos y que había sido concluido con la toma de posesión del cargo.

En el caso concreto, ocurre exactamente lo mismo, en función del principio de definitividad, como principio constitucional e institucional, que incide en los principios de certeza, legalidad y gobernabilidad, no es posible analizar en este momento procesal, los actos reclamados consistentes en la calificación y declaración de validez de la elección; la entrega de la constancia de mayoría, ambos llevados a cabo por el Consejo General del IEE en sesión permanente de nueve de junio, y la emisión del dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año, porque fueron emitidos en una etapa del proceso electoral que ya se agotó y clausuró, impidiendo que pueda abrirse nuevamente, de modo tal, que todo lo actuado en ella quedó firme y es definitivo.

De lo contrario, esto es, de someter a revisión judicial los citados actos a través del recurso planteado, implicaría poner seriamente en riesgo la **estabilidad democrática y la paz social** que impera en el Estado, ya que ello provocaría volver a una etapa electoral que ya está agotada, reavivando un conflicto que ya había sido procesado por los cauces institucionales democráticos; tan es así, que el incoante estuvo conforme con la declaración de validez de elección y la entrega de constancia de mayoría, acaecidos en el Distrito Electoral Uninominal 20 con Cabecera en Puebla, pues no existe radicada demanda alguna en este Tribunal en el que se hayan impugnado en tiempo los citados actos a través del recurso de inconformidad, que es el idóneo para controvertir dichos actos, conforme lo prevé el artículo 351 del código comicial local.⁹

Por ello, lo que se busca evitar es provocar una inestabilidad democrática en el Estado que merme la paz y seguridad social, ya que el objetivo del principio de definitividad radica en hacer funcional el proceso electoral, esto es, que cada uno de sus momentos se desenvuelva como prevé la ley, y con ello evitar la posibilidad de regresar a etapas del proceso ya cerradas.

De lo contrario, se podría generar el peligro de que dicho procedimiento comicial se mantuviera inacabado de manera indefinida, con el riesgo de no poder renovar los poderes públicos del Estado en las fechas señaladas en la ley; en ese sentido, el desajuste de una sola de las distintas fases del proceso podría afectar las subsecuentes, si se toma en consideración que los plazos previstos para cada una son sucesivos y demasiado breves.

En conclusión, el principio de definitividad en las etapas electorales tiene por función dotar de certeza al proceso electoral, al

⁹ ARTÍCULO 351. La inconformidad es el recurso jurisdiccional a través del cual se combaten los resultados consignados en las actas de cómputo municipal o distrital, para hacer valer presuntas causas de nulidad, con el objeto de obtener la declaratoria de nulidad de la elección en un distrito, en un municipio, de la elección de Gobernador del Estado o de la votación emitida en una o varias casillas. El término para interponer el recurso, será de tres días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo correspondiente.



establecer como firmes e inatacables aquellos actos y resoluciones que no fueron impugnados en su momento; lo anterior quiere decir, como ya se estableció con anterioridad, que el principio de definitividad, una vez que opera, impide cuestionar la legalidad de los actos emitidos dentro de las etapas del proceso electoral ya concluidas, pues ello podría ocasionar que éste quedara inacabado de manera indefinida, o bien, causar el desfase de las subsecuentes etapas del proceso de renovación democrática, lo cual terminaría por violentar el principio de certeza previsto por la ley, propiciando un **sistema jurídico disfuncional** y provocado su inestabilidad y nula efectividad, en claro detrimento a la paz social que debe imperar en el Estado.

Por lo anterior, la etapa de declaración y validez de elección ya causó definitividad y no es posible -aún de resultar fundada la pretensión- realizar ninguna acción para reparar el derecho que la actora considera le ha sido violado. Lo anterior, tiene sustento en las tesis CXII/2002 y XL/99; de rubros: ***“PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL”*** y ***“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)”*** respectivamente, conforme a las cuales, cualquier irregularidad que se suscite en alguna de las fases del proceso electoral es reparable mientras no se pase a la siguiente.

A mayor abundamiento, debe decirse que no es posible estudiar el acto consistente en la emisión del dictamen consolidado de manera aislada, ya que era menester que el actor impugnara también el cómputo final, la declaración de la validez de la elección, y la entrega de la constancia de mayoría, todos ellos llevados a cabo por el Consejo General del IEE en sesión permanente de nueve de junio; sin embargo, el incoante dejó de atacar dichos actos en tiempo y forma -

como se estableció en párrafos anteriores-, por lo que adquirieron el carácter de consentidos, quedando firmes.

Ello es así, pues no es jurídicamente viable analizar, por sí solo, es decir, de manera autónoma, el acto consistente en la emisión del dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año, pues se insiste el actor dejó de impugnar los actos que le precedieron (cómputo final, declaración de validez de elección y entrega de constancia de mayoría), cuyo estudio como parte de la litis era indispensable para estar en condiciones de analizar la nulidad de la elección que ahora pretende reclamar por rebase de tope de gastos de campaña; por lo que en el caso se actualiza el **principio de definitividad**.

Por último, no está por demás establecer que, en todo caso, el acto consistente en la emisión del dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año, debió impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ser este el órgano competente para conocer y resolver las irregularidades que considere han incurrido los candidatos o los partidos políticos fiscalizados, así como la Unidad de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la elaboración y votación de los dictámenes consolidados por el que se fiscaliza el financiamiento público para la obtención del voto; lo anterior tiene su fundamento en el artículo 82 de la Ley General de Partidos Políticos, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 82.

1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá:

- a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica y el informe respectivo;*
- b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, la resolución recaída al recurso, y*



c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal."

De igual manera, el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contempla la interposición del recurso de apelación contra dicho acto; dicho numeral dice:

"Artículo 40

1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales, y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal o de consulta popular, el recurso de apelación será procedente para impugnar:

a) Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión previstos en el Título Segundo del presente Libro; y

b) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva.

2. En la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, el recurso de apelación será procedente para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión promovidos en los términos del párrafo 2 del artículo 35 de esta ley."

Por lo cual, no puede ser objeto de revisión por este Tribunal local, el acto consistente en la emisión del dictamen consolidado, aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de veintidós de julio del presente año, por la distribución de competencias precisadas en la legislación general en materia electoral.

Por último, a mayor abundamiento, en todo caso, el elemento en estudio especifica que dicha determinación, es decir, el Dictamen Consolidado emitido por el Consejo General del INE, debe estar firme.

Al respecto, el artículo 41 base IV de la Constitución, establece que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale esa Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación.

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral se encuentra impedido para esperar a que dicho Dictamen adquiriera firmeza, en virtud de la obligación que se tiene de resolver con la debida oportunidad los medios de impugnación que se presenten, y que estén relacionados con el proceso electoral que actualmente transcurre, a efecto de que se esté en condiciones de agotarse la cadena impugnativa.

Criterio similar fue sostenido por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al resolver el juicio ciudadano de clave SCM-JDC-1040/2018 y SCM-JRC-165/2021 acumulados, con fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciocho.

En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, se surte la causal de **DESECHAMIENTO DE PLANO** a que se refiere el contenido de la fracción III del artículo 369 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por **extemporaneidad**; además de que respecto de los actos reclamados opera el principio de **preclusión** -como ya quedo expuesto con anterioridad- y el principio de **definitividad** en materia electoral, como principio constitucional e institucional, que incide en los principios de certeza, legalidad y gobernabilidad, y estabilidad democrática.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 fracciones V y VII, 3, 8, 325, 336, 338 fracciones I y III, 340 fracción II, 348 fracción II y 354 párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y 4, 5, 7, fracción II, 11, fracción IV, 14, fracciones VII y XIX, y 18 fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, se

RESUELVE:

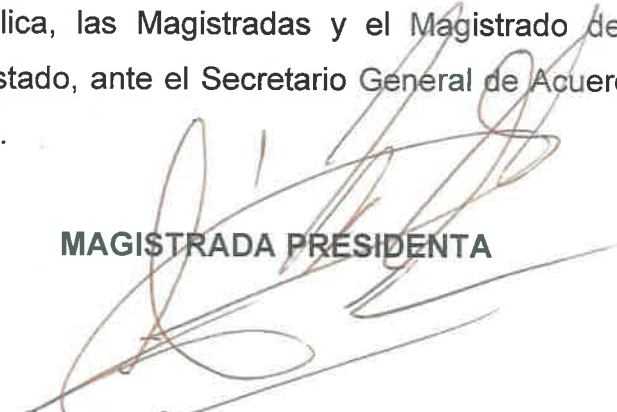


TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE PUEBLA

ÚNICO. Se **DESECHA DE PLANO** el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, interpuesto por Frine Soraya Córdova Moran, en su calidad de candidata la Coalición Va por Puebla, a la Diputación del Distrito Electoral Uninominal 20 con Cabecera en Puebla, por las razones expuestas en el considerando **SEGUNDO** rector de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y EN ATENCIÓN A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO GENERAL 06/2020 DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, Y CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 4/2021, DE RUBRO “ACCESO A LA JUSTICIA. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN GARANTIZARLA EN EL CONTEXTO DE CUALQUIER EMERGENCIA NACIONAL O CRISIS SANITARIA” EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Así lo resolvieron y firmaron en esta fecha, por unanimidad de votos y en sesión pública, las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.


MAGISTRADA PRESIDENTA

NORMA ANGÉLICA SANDOVAL SÁNCHEZ

MAGISTRADA


IDAMIS PASTOR
BETANCOURT

MAGISTRADO


RICARDO ADRIÁN
RODRÍGUEZ PERDOMO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


ISRAEL ARGÜELLO BOY

